



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, junio 30 de 2021

Radicado: 05001-31-05-**005-2018-00168 01**
Demandante: CARLOS HERNANDO LORA CASTILLO
Demandado: COLPENSIONES
Asunto: APELACIÓN CONTRA SENTENCIA
Tema: RELIQUIDACIÓN PENSIONAL

En la fecha y hora señalada en el auto anterior, la sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

No se hace necesario aceptar la sustitución de poder que se efectúa en favor de la doctora Gloria Alexandra Gallego Chalarca, a quien desde la providencia del 21 de mayo de 2018 (fl. 67) se le reconoció personería adjetiva para representar a la parte accionada.

ANTECEDENTES

La A quo, tras considerar que bajo el imperio del Decreto 758 de 1990 si es posible la sumatoria de semanas de cotización con tiempo de servicio sin cotización al extinto ISS, ordenó el reajuste pensional pretendido, con efectos desde el 1° de

febrero de 2015 tras aplicar un término trienal de prescripción, cuantificó la diferencia en la mesada desde tal data, a pagarse con la debida indexación. Por último, gravó en costas a la accionada.

La demanda aspira a que se revoque la decisión, indicando que conforme con a la sentencia de la Corte constitucional SU 769 de 2014 el reconocimiento de la pensión de vejez en los términos de la pensión del Decreto 758 de 1990 por sumatoria de tiempos procede para aquellas prestaciones causadas a partir de la comunicación de tal decisión unificadora, esto es a partir del 16 de octubre de 2014, sin que tal fallo confiriera efectos retroactivos.

ALEGATOS

Dentro del término de traslado que establece el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, Colpensiones presentó escrito donde indica que no hay lugar al reajuste pretendido, ya que conforme a las premisas del Decreto 758 de 1990 se causa la pensión con las semanas efectivamente cotizadas a la administradora del régimen de prima media, sin la posibilidad de acumular tiempos de servicios sin cotización.

A su turno, la activa expuso que hay lugar a la confirmación de la decisión, ya que bajo la égida del Decreto 758 de 1990 con la densidad de cotización acumulada por el señor Lora Castillo se obtendría una tasa de reemplazo del 90%, posibilidad que es avalada por la Sala de Casación Laboral de la CSJ.

CONSIDERACIONES

Previo a resolver la controversia, importa poner de presente que a partir de las pruebas adosadas al expediente, en esta instancia se encuentran por fuera de discusión los siguientes elementos fácticos: **1)** Que el demandante nació el 19 de diciembre de 1949 (fl.13), por lo que al 1° de abril de 1994 superaba los 40 años de edad, lo que en principio lo hace beneficiario del régimen de transición pensional reglado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; **2)** Que el 27 de enero de 2010

solicitó al extinto ISS la pensión de vejez, resuelta inicialmente en resolución 25467 de 2011 que reconoce la prestación, aplicando como referente normativo la Ley 71 de 1988, en cuantía equivalente a 1 SMLMV, a partir del 1° de febrero de 2011, la que se calculó con un total de 1131 semanas que se componen de 1540 días de servicio a través de empleadores públicos que no realizaron cotizaciones al ISS y 6382 días cotizados al ISS, (fl. 14/16); **3)** Que el 13 de septiembre de 2011 el señor Lora Castillo presentó recursos contra el acto administrativo de reconocimiento pensional, solicitando su reajuste de cara al Decreto 758 de 1990, resuelta en resolución VPB 30193 de 2015, indicando que el actor acumula 1267 semanas, pero que para efectos de calcular la pensión con las reglas del Decreto 758 de 1990 solo se tendrían en cuenta los ciclos cotizados al RPM, obteniendo una prestación en igual cuantía (fls. 17/19) y **4)** Que el 1° de febrero de 2018 el actor insistió en la reclamación de reliquidación pensional, negada en resolución SUB 40641 de 2018, indicando que pese a que acumula 1272 semanas de cotización, el cálculo bajo el decreto 758 de 1990 arroja el mismo valor de la prestación (fls. 22/24)

En este orden de ideas y en virtud del principio de consonancia, le corresponde a esta Corporación determinar si hay lugar a la reliquidación de la pensión que disfruta el señor Lora Castillo, a efectos de aplicar las previsiones del Decreto 758 de 1990.

Pues bien, no existe discusión respecto a que el actor, en atención a su edad, es beneficiario del régimen de transición pensiona de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que 1° de abril de 1994, contaba con 44 años de edad, condición que validó el extinto Instituto de Seguros Sociales y ahora Colpensiones, al reconocer la pensión con remisión a algunos lineamientos del régimen anterior, particularmente la 71 de 1988, pero negando su reajuste bajo la égida del Decreto 758 de 1990, al considerar que solo podría contabilizarse las semanas efectivamente cotizadas al RPM, por tanto se consigue una mesada en equivalente cuantía.

Relativo a la satisfacción del requisito de densidad de cotización que establece el Decreto 758 de 1990, resulta ilustrativos los lineamientos expuestos en las sentencias SU 769 de 2014 y SU 057 de 2018 las que además de vinculantes para

el funcionario judicial, develan el espíritu del sistema de seguridad social en pensiones, regido por los principios *in dubio pro operario y pro homine*, que en casos como el analizado, exigen del operador judicial asumir una posición que maximice la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, en este caso, interpretando que para efecto del reconocimiento de esta prestación es posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad, se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.

Señala la Corte Constitucional que en tratándose de la garantía pensional, el principio de favorabilidad impone al aplicador de la norma, ora autoridades administrativas, ora judiciales, verificar la consolidación del derecho, no solo conforme a los requisitos del sistema al cual se encontraba afiliada la persona al momento de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, sino también todos aquellos otros regímenes previos a la expedición del Sistema General de Pensiones.

En particular respecto al Decreto 758 de 1990 en cuyo artículo 12 impone para la consolidación del derecho acumular una densidad de cotización de 1000 semanas ó 500 dentro de los 20 años previos al cumplimiento de la edad mínima, la forma de satisfacer tal premisa ha sido objeto de diversas interpretaciones, donde la Corte Constitucional acude a la interpretación más favorable en pro de los derechos del afiliado, predicando que tal acopio no es exclusivo de semanas efectivamente cotizadas al RPM, dando paso a una serie de decisiones que de forma paulatina fueron incluyendo más supuestos a tal protección.

Es así que la sumatoria de semanas cotizadas con tiempos de servicio de cotización, se aplica tanto para acreditar las 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, como las 1000 semanas de tiempo cotizadas en cualquier tiempo, sin miramiento a la fecha de consolidación del derecho pensional en relación con la decisión unificadora SU 769 de 2014, en tanto tal requisito no está previsto en el decreto 758 de 1990, la Ley 100 de 1993, como

tampoco en el acto legislativo 01 de 2005, no fue contemplado por la decisión unificadora, pero además el criterio de sumatoria, de antaño era sostenido por la guardiana de la constitución y con la expedición de la sentencia en comento, se solidificó tal posición e impuso que toda decisión que de allí en adelante, respete tal criterio interpretativo. (al respecto la sentencia T -528 de 2020)

Criterio que fue adoptado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, vertido entre otras en sentencias SL 1947 y SL 1981 ambas de 2020. En la primera de ellas la corporación rectifica su posición en el tema, indicando que para aquellos beneficiarios del régimen de transición pensional de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la densidad de cotización que establece el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 puede consolidarse con semanas de cotización y los tiempos laborados a entidades públicas sin cotizaciones al ISS.

Para llegar a tal conclusión la máxima corporación de la jurisdicción ordinaria laboral indicó que, en el marco del sistema creado por la Ley 100 de 1993 y aquellas disposiciones a las cuales permitió una aplicación parcial, la forma de computar las semanas para arribar al derecho pensional se rige por el literal f del artículo 13, el parágrafo 1º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la mencionada norma, las que permiten expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos “así estos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social”, indicando que las contingencias del mercado laboral llevan a que la persona transitoriamente se desempeñe en el sector público y privado, habilitando ambos para efectos de causar las prestaciones económicas, pues en últimas lo que debe contar es el trabajo humano.

Criterio de favorabilidad que ha sido expuesto no solo en los eventos en que se discute la causación de la garantía pensional, pero también para la reliquidación de aquellas prestaciones ya reconocidas y que se vienen pagando por la administradora de pensiones del RPM, tal como fue concedido por la alta corporación en sentencias SL 2557 de 2020, y SL 2061 de 2021 que respectivamente, reajustaron prestación

inicialmente concedida con remisión a la Ley 71 de 1988 y la Ley 33 de 1985, en atención al régimen de transición pensional, fijando un nuevo monto, con las reglas del Decreto 758 de 1990, en particular, ajustando la tasa de reemplazo con la totalidad de cotizaciones y tiempos de servicio sin aportes.

Desciende al **caso concreto, encuentra la Sala que las premisas expuestas han de ser acogidas de forma plena** y llevan a declarar para el señor Carlos Hernando Lora Castillo, quien dada su condición de beneficiario del régimen de transición pensional, el acceso a la prestación se halla reglado bajo diferentes regímenes de referencia, a saber la Ley 71 de 1989 y el decreto 758 de 1990, eligiendo entre ellos el que genere mejores beneficios, con la posibilidad de acopiar la densidad de cotización necesaria, no solos las semanas efectivamente cotizadas al RPM, pero también aquellos tiempos de servicios a entidades públicas.

Se destaca que el señor Lora Castillo prestó servicios para entes del Departamento de Boyacá, de forma discontinua entre el 4 de enero de 1979 al 13 de septiembre de 1990 con un total de 1540 días que se traducen en 220 semanas y que en tal lapso se efectuaron descuentos y cotizaciones a la Caja de Previsión Social de Boyacá (fls.37/43), quien ha participando del pago de la pensión en un porcentaje del 19.44%, (fls.14/16) lo que refleja que tales tiempos de servicios financian la prestación reconocida y que por tanto su inclusión para efectos de un recálculo de la prestación no afecta la sostenibilidad económica del sistema.

Así las cosas, se tienen que el actor dada su fecha de nacimiento, 19 de diciembre de 1949, es beneficiario del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que arribó a los 60 años de edad el 19 de diciembre de 2010 y acumula un total de 1272 semanas válidas para el reconocimiento pensional (densidad enunciada en la resolución SUB 40641 de 2018) acopiadas entre el 2 de enero de 1969 al 31 de enero de 2011 (fls. 84/89); por tanto, satisfizo los presupuestos de causación de la pensión de vejez establecidos tanto en la Ley 71 de 1988 como el Decreto 758 de 1990, disposición esta última

que le resulta más favorable, en tanto permite que su tasa de reemplazo sea del 90%, llevando al aumento de su mesada pensional, consideración expuesta por el A quo y que se confirma en esta instancia.

Atendiendo al cálculo elaborado por el A quo, el que no fue objeto de reparo por las partes, que refleja los salarios base de cotización de toda la vida del afiliado y que son actualizados conforme a la variación del IPC vigente para el mes de diciembre de 2010, conforme al reporte del DANE¹, se obtiene un IBL de \$714.689, al que se le aplica una tasa de reemplazo del 90% dada la densidad de cotización, para una mesada inicial de \$643.220, con la que se realiza el reajuste pensional pretendido.

Dado el paso del tiempo y tratándose de prestaciones periódicas como las pensiones, los efectos extintivos se contabilizan conforme se van causado las mesadas, interrumpiendo su prescripción con la reclamación que se realice una vez se han causado (al respecto la sentencia CSJ SL 794 de 2013)

Así las cosas, empero haberse realizado una reclamación de reajuste pensional el 26 de julio de 2011 (así se enuncia en la resolución VPB 30193 de 2016) no se ejerció la acción judicial en los tres años siguientes. Realizando una posterior reclamación el 1° de febrero de 2018 (fl. 20), y presentada la demanda el 21 de marzo de 2018, fue aquella reclamación la que cesó los efectos extintivos, por tanto han de concederse los ajustes causados entre el 1° de febrero de 2015 y que calculados hasta el 30 de junio de 2021 ascienden a **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$5´404.871)** suma de la cual se autoriza a la accionada a efectuar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en pensiones.

Año	Variación IPC	Mesada pagada	Mesada reajustada	Diferencia mensual	N° mesadas	Sub total
2011	3,73%	\$ 535.600	\$ 643.220	\$ 107.620	Ciclos prescritos hasta el 31 de enero de 2015	
2012	2,44%	\$ 566.700	\$ 667.212	\$ 100.512		
2013	1,94%	\$ 589.500	\$ 683.492	\$ 93.992		

¹ Registro base 2008 vigente para el momento de causación y reconocimiento pensional

2014	3,66%	\$ 616.000	\$ 696.752	\$ 80.752		
2015	6,77%	\$ 644.350	\$ 722.253	\$ 77.903	13	\$ 1.012.738
2016	5,75%	\$ 689.454	\$ 771.149	\$ 81.695	14	\$ 1.143.737
2017	4,09%	\$ 737.717	\$ 815.491	\$ 77.774	14	\$ 1.088.830
2018	3,18%	\$ 781.242	\$ 848.844	\$ 67.602	14	\$ 946.430
2019	3,80%	\$ 828.116	\$ 875.837	\$ 47.721	14	\$ 668.099
2020	1,61%	\$ 877.803	\$ 909.119	\$ 31.316	14	\$ 438.427
2021	--	\$ 908.526	\$ 923.756	\$ 15.230	7	\$ 106.610
TOTAL						\$ 5.404.871

A partir del 1° de julio de 2021 la entidad accionada seguirá reconociendo la mesada en cuantía de \$923.756 a razón de 14 mesadas anuales.

Reajuste pensional que se pagará con la debida indexación, ello para compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero derivado del paso del tiempo sin generarse el pago de lo debido. Se aplicarán las variables reportadas por el DANE tanto para el momento en que se generó la diferencia en la mesada, como aquella del momento a efectuar el pago con la siguiente fórmula

$$VA = \frac{VH \times IPC \text{ Final}}{IPC \text{ Inicial}}$$

De donde:

VA = Valor actualizado

VH = Valor histórico que corresponde a la suma a indexar.

IPC Final = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes en que se materialice el pago.

IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor vigente en el mes siguiente a la diferencia pensional a indexar.

(sentencia CSJ SL 593 de 2021)

Por último, atendiendo a los lineamientos del artículo 365 del C.G.P, costas en ambas instancias a cargo de la accionada. En esta se tasan las agencias en derecho en la suma de medio (1/2) SMLMV

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley modifica los numerales 2 y 3 de la sentencia a efectos de extender los efectos del reajuste pensional, los que causados entre el 1° de febrero de 2015 y el 30 de junio de 2021 ascienden a **CINCO MILLONES**

CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$5'404.871) suma de la cual se autoriza a la accionada a efectuar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en pensiones. Reajuste que se pagará con la debida indexación.

A partir del 1 de julio de 2021 la entidad accionada seguirá reconociendo la mesada en cuantía de \$923.756 a razón de 14 mesadas anuales.

En lo demás se confirma la sentencia impugnada.

Costas en ambas instancias a cargo de la accionada. En esta se tasan las agencias en derecho en la suma de medio (1/2) SMLMV

La presente decisión se notifica por ESTADOS.

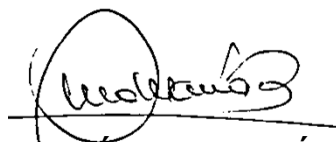
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados N° 114 publicados por medios digitales el 1° de julio de 2021